

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DEL VALLE DEL CAUCA**

**AUTO**

**PROCESO:** 76-001-23-33-000-2021-00375-00  
**ACCIONANTE:** CARLOS JOSÉ HUMBERTO GARCÍA GARCÍA  
**ACCIONADOS:** MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVÍAS- DIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL, DEPARTAMENTO DEL VALLE, DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, SOCIEDAD PORTUARIA DE TERMINALES MARÍTIMOS DEL PACÍFICO S.A  
**ACCIÓN:** PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA LEY 472 DE 1998-**POPULAR**

**Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO**

Santiago de Cali (V.), quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

**ANTECEDENTES**

El señor Carlos José Humberto García García actuando en nombre propio y como agente oficioso de los habitantes del corregimiento de la Bocana, las veredas de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y de los campesinos habitantes de la orilla de la desembocadura del río San Juan y de las comunidades Wanaan, Embera y afros respectivamente, instauró la presente acción popular en contra del Ministerio de Transporte, Invías- Dirección Marítima y Fluvial, Departamento del Valle, Distrito Especial de Buenaventura, Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, Superintendencia de Puertos y Transportes, Sociedad Portuaria de Terminales Marítimos del Pacífico S.A, por considerar vulnerado el derecho a la libertad de locomoción y domicilio, con el cobro de una “contribución obligatoria” para transitar por el muelle turístico de Buenaventura, en virtud de la concesión que se hiciera a la Sociedad de Terminales Marítimos del Pacífico S.A.

**CONSIDERACIONES**

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998 en concordancia con el numeral 16 del artículo 152 de la ley 1437 de 2011.

Ahora bien, revisada la actuación se observa que la misma adolece de los siguientes aspectos:

- i) Sobre la legitimación para interponer acciones populares, la Ley 472 de 1998 establece en su artículo 13 lo siguiente:

**“ARTICULO 13. EJERCICIO DE LA ACCION POPULAR.** Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos **o por quien actúe en su nombre.**”

Si bien en el presente asunto, el señor Carlos José Humberto García García aduce actuar en su propia representación, también esgrime que lo realiza en calidad de **agente oficioso** de los habitantes del corregimiento de la Bocana, las veredas de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y de los campesinos habitantes de la orilla de la desembocadura del río San Juan y de las comunidades Wanaan, Embera y afros respectivamente, sin determinar las razones del por qué las partes que concurren a la presente demanda a través del agente oficioso, no lo hacen en nombre y representación propia.

- ii) Por otro lado, respecto de los requisitos que debe contener el escrito de demanda debe tenerse en cuenta que de conformidad con el numeral 4º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, cuando se pretenda la protección de derechos o intereses colectivos, constituye un requisito de procedibilidad la solicitud de adopción de medidas necesarias para la protección de los derechos que se consideran conculcados ante la autoridad competente, petición que se encuentra señalada en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 así:

**“ARTÍCULO 144.** Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. Expresión subrayada declarada Exequible por los cargos analizados, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011

**Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado.** Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.” (Negrilla de Sala)

De la revisión de la demanda, se observa que el actor elevó petición dirigida a las accionadas, solicitando información sobre en qué norma jurídica, acuerdo, ordenanza, resolución, decreto o ley, se soporta el cobro de la “contribución obligatoria” para transitar en el muelle turístico de Buenaventura, además, que se declarara la nulidad de la Resolución No. 0704 del 02 de junio de 2017 aclarada mediante Resolución 0472 del 16 de marzo de 2018 proferida por el Vicepresidente de Estructuración, Agencia Nacional de

Infraestructura, adscrito al Ministerio de Transporte, mediante la cual se otorgó la concesión portuaria para embarcadero del muelle turístico de Buenaventura, a la Sociedad Terminales Marítimos del Pacífico S.A, y la solicitud de no incrementar los valores de los tiquetes de transporte, sin embargo, al cotejar lo solicitado en sede administrativa y las pretensiones de la demanda, se encuentran algunas diferencias, puesto que en la petición no agotó la renuencia con lo relacionado a la pretensión principal sobre la abstención de cobrar la “contribución obligatoria.”

En este sentido, para el despacho se echa de menos la existencia de la reclamación de adopción de medidas elevada ante las autoridades competentes hoy accionadas para la protección del derecho o interés colectivo invocado en la demanda en los términos previstos en el párrafo tercero del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, solicitud que de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 161 de la misma normatividad constituye un requisito de procedibilidad en las demandas donde se pretende la salvaguarda de derechos o intereses colectivos, como tampoco se evidencia que dicha petición la haya realizado en nombre de los habitantes del corregimiento de la Bocana, las veredas de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y de los campesinos habitantes de la orilla de la desembocadura del río San Juan y de las comunidades Wanaan, Embera y afros respectivamente .

- iii) Finalmente, el numeral 8° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

*“Artículo 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

*(...)*

*8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente, deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*

*En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.*

*(...)”*

Revisados los documentos aportados con el expediente, no se observa que el demandante haya enviado copia de la demanda y de sus anexos por medio electrónico o físico a los demandados.

En razón de lo anterior, se inadmitirá la presente demanda, concediéndole al accionante el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia, a fin de que acredite el cumplimiento de lo aquí anotado, so pena de rechazo.

En mérito de lo expuesto, El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en Sala Unitaria,

**RESUELVE**

**PRIMERO: INADMITIR** la demanda de PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA LEY 472 DE 1998-ACCIÓN POPULAR instaurada por el señor CARLOS JOSÉ HUMBERTO GARCÍA GARCÍA actuando en nombre propio y como supuesto agente oficioso de los habitantes del corregimiento de la Bocana, las veredas de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y de los campesinos habitantes de la orilla de la desembocadura del río San Juan y de las comunidades Wanaan, Embera y afros respectivamente, en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVÍAS- DIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL, DEPARTAMENTO DEL VALLE, DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, SOCIEDAD PORTUARIA DE TERMINALES MARÍTIMOS DEL PACÍFICO S.A.

**SEGUNDO:** Otorgar al accionante tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia, a fin de que acredite el cumplimiento de lo aquí anotado, so pena de rechazo.

**TERCERO: NOTIFICAR** a la parte accionante al siguiente correo electrónico: [kargar15@yahoo.es](mailto:kargar15@yahoo.es).

**Notifíquese y Cúmplase,**

**JHON ERICK CHAVES BRAVO**  
Magistrado